3 La tributación cooperativa en Guatemala

Claudia Lucrecia Paredes Castañeda

1. Reseña del sistema impositivo general y cooperativo del país, partiendo del marco constitucional. Síntesis de su evolución y estado actual.

1.1 Principios constitucionales que rigen en el Sistema Impositivo General y Cooperativo Guatemalteco

De conformidad con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, son deberes de los guatemaltecos, entre otros, el contribuir con los gastos públicos, en forma prescrita por la ley y a obedecer las leyes.

De aquí se desprende el sistema impositivo fiscal, , el cual está limitado por los principios que se desarrollan más adelante.

Corresponde al Congreso de la República: decretar, reformar y derogar las leyes (art. 171 Constitucional) es decir, crear los impuestos ordinarios y extraordinarios. Los impuestos se crean por medio de ley o decreto.

Ordinarios: Son los impuestos cuya imposición y recaudación es regular y fija, destinados a cubrir los gastos públicos normales.

Extraordinarios: Son los impuestos cuya imposición y recaudación no es regular y fija, destinados a cubrir una determinada necesidad. Cubierta la necesidad, el impuesto se extingue o pierde todo efecto.

Ambos impuestos se basan en la observación de dos presupuestos:

- Que sean necesarios para el Estado. Obligadamente se basaran en necesidades que deberán justificarse puntualmente. Sin tal justificación, el impuesto ordinario y extraordinario puede considerarse inconstitucional. La justificación debe estar contenida en una exposición de motivos

que se incluye dentro de todo proyecto de ley o decreto que se presenta al pleno del Congreso de la República.

- Que las bases de recaudación formen parte de la ley o decreto. Estas bases están contenidos en el artículo 239 de la Constitución, es decir el hecho generador del impuesto, las exenciones que se establezcan, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, descuentos, reducciones y recargos, así como las infracciones y sanciones tributarias.

Para el efecto anterior el Código Tributario Decreto número 6-91 del Congreso de la República, desarrolla los conceptos de tributos:

Tributos: Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.

Clases de Tributos: Son tributos los impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. No incluye tasas.

Impuesto: Es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente.

Arbitrio: Es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias Municipalidades.

Contribución Especial y Contribución por Mejoras: Contribución especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador, beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios Estatales. Contribución especial por mejoras, es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria y tiene como limite su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente, el incremento de valor del inmueble beneficiado.

La obligación tributaria: constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del

tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo, surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria, sobre determinados bienes o con privilegios especiales.

La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente.

El hecho generador: O hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley, par tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Artículo 31 Código Tributario.

Exenciones: Es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de ésta, cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Artículo 62 del Código Tributario.

Sujeto Pasivo del Tributo: Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad del contribuyente o de responsable. Artículo 18 Código Tributario.

Tipo Impositivo: Tarifa que debe aplicarse a la base imponible para determinar el monto o cuantía del tributo.

Deducción: Descontar una cantidad o parte del valor a la base imponible.

Descuentos: Rebaja o compensación parcial de deuda por lo tanto, es una rebaja del tributo determinado.

Reducciones: Desgravación, rebaja o exención parcial y recargos, es decir aumentos del tributo.

Infracciones: Toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal. Artículo 69 del Código Tributario.

Sanción: Pena aplicable a la infracción. Debe tenerse en cuenta el artículo

41 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que prohíbe la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor de impuesto emitido.

Entre los principios Constitucional que rigen la actividad tributaria están:

1.1.1. Principio de Legalidad

El artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula que corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo **a la equidad y justicia tributaria**, así como determinar las bases de recaudación.

Al declarar que la exclusividad de la ley le corresponde al Congreso, se entiende que la ley contendrá todos los elementos esenciales que determinan el monto de la obligación. La creación de tributos por medio de la ley involucra la voluntad o consentimiento de quienes deben pagar, por cuanto la ley que los crea es aprobada por los representantes electos (diputados) por los propios contribuyentes en ejercicio de su soberanía. En consecuencia la ley tributaria se sujeta al proceso de formación y sanción de la ley formal dictada por el Congreso de la República.

1.1.2. Principio de Justicia y Equidad y Principio de Capacidad de Pago

Los habitantes deben contribuir al sostenimiento en proporción a sus capacidades económicas. Si el tributo se basa en la capacidad económica de cada persona el tributo es equitativo. Si no se basa en dicha capacidad, no es equitativo.

1.2.3 Principio de Igualdad o de Generalidad o de Uniformidad

Señala que el Estado al establecer tributos, no puede establecer discriminaciones subjetivas. El sentido de igualdad en el campo tributario es garantizar a las personas la igualdad de trato frente a la imposición de

las cargas públicas independientemente de sus condiciones subjetivas. Este principio no prohíbe las exenciones de carácter personal cuando ellas estén inspiradas en el bien común como son las exenciones a favor del Estado, de las Municipalidades y de las Organizaciones determinadas, como lo son las cooperativas.

1.1.4 Prohibición de los Tributos Confiscatorios

Confiscar es privar a una persona de sus bienes y aplicarlos al fisco, de manera que un tributo es confiscatorio cuando la carga esta tan excesiva que priva a las personas de sus bienes.

1.1.5. Prohibición de Doble o Múltiple Tributación Interna

La Constitución Política de la República de Guatemala establece la definición: Hay doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o período impositivo.

2. La modernización del Estado y los Acuerdos de Paz

Con el fin del conflicto armado y el advenimiento de los procesos democráticos se empezó a plantear en la escena pública el tema de la modernización del Estado. La Constitución de 1985 introdujo algunos cambios institucionales con efectos políticos importantes al crear la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Oficina del Procurador General de los Derechos Humanos.

Vinculado a los cambios políticos también está el papel del Fiscal General de la República, como Jefe del Ministerio Público, el Procurador General de la Nación. Forman parte de los cambios en el ámbito político las nuevas funciones de la Vicepresidencia de la República, la creación de los Consejos de Desarrollo y la asignación constitucional de recursos presupuestarios para los municipios.

La preocupación por introducir reformas en el Estado fue planteada de manera expresa con ocasión de los Acuerdos de Paz. Como parte de ello se han impulsado un conjunto de leyes que tienen que ver con el funcionamiento del poder ejecutivo y legislativo, además de favorecer una mayor participación y descentralización. También ha significado la creación de nuevas instituciones, incluyendo la constitución de la Policía Nacional Civil como un cuerpo desmilitarizado, y de la Superintendencia de Administración Tributaria como entidad responsable de modernizar el control y la percepción de impuestos. No todas las reformas se han originado en cambios de la Constitución o de los Acuerdos de Paz. Otras han provenido del convencimiento de algunos gobiernos de la necesidad de fortalecer las fuerzas de mercado e introducir mayores elementos de competencia y desconcentración en el ámbito de las políticas y acciones públicas. Incluyen políticas de desconcentración del poder ejecutivo, especialmente en el área de salud –reflejado en el SIAS- y en educación –PRONADE-.

Congruente con esta visión la política económica ha estado orientada a convertir al Estado más en un facilitador que en un prestador directo de servicios o productor de bienes. En la redefinición del papel del Estado ha tendido a prevalecer la creencia de que los recursos públicos tienen que ser mínimos y sólo suficientes para poder satisfacer las funciones básicas de mantener el orden público y para cubrir el área de los gastos sociales. En esta perspectiva de cambio, se ha aplicado una estrategia de privatización de activos públicos, limitados en importancia, salvo en el caso de la luz eléctrica y de los servicios de teléfonos.

En el ámbito de la modernización del Estado aún son varias las dimensiones importantes que están pendientes de cumplirse, todas ellas sugeridas o aceptadas en los Acuerdos de Paz. Así, el sistema judicial aún espera una profunda reorganización funcional y técnica, y están pendientes de generalizarse los cambios del Registro y el Catastro, además de aspectos substantivos de la descentralización y lo relativo al papel del Ejército en sus dimensiones claves de la inteligencia, la seguridad y el Estado Mayor Presidencial.

3. La Política Tributaria en Guatemala

La característica principal del sistema tributario de Guatemala es su bajo rendimiento recaudatorio. Si bien la presión tributaria ha aumentado, en los últimos años se ha situado alrededor del 8%. Se toma en cuenta que el promedio de la carga tributaria ha sido del 7.8% y que constituye el promedio más bajo registrado en América Latina en los últimos cuarenta años. Como resultado de los Acuerdos de Paz, a partir de 1997, la carga tributaria superó por varios años consecutivos la barrera del 8%, sin alcanzar el 12% establecido como meta. Dentro de este contexto se define la carga tributaria como la relación que existe entre los ingresos tributarios y el Producto Interno Bruto –PIB-.

El bajo nivel de recaudación ha impedido cumplir con lo propuesto y los objetivos planteado o establecidos en los Acuerdos de Paz.

Ante el reconocimiento que no se podrían alcanzar las metas tributarias contenidas en los Acuerdos de Paz, la Comisión de Acompañamiento de los mismos acordó recalendarizar las metas y se asumieron tres tipos de compromisos:

Adoptar nuevas Políticas Tributarias, que incluían la extensión del IEMA.

La eliminación del crédito del IVA en el ISR, rechazado por el Congreso.

Impulsar un proceso de concertación con miras a alcanzar un Pacto Fiscal.

Otro aspecto de la baja recaudación es que condiciona la estabilidad macroeconómica, dado por la insuficiencia de recursos que provocan el déficit fiscal porque el Estado gasta más de lo que recibe en concepto de ingresos que estimulan un mayor endeudamiento externo e interno, limitando los márgenes de acción de la política monetaria y presionando sobre las tasas de interés.

El sistema tributario en el país conserva varios rasgos históricos de carácter negativo, tales como una baja capacidad de recaudación, una notable inestabilidad de los ingresos tributarios, una fuerte dependencia de

los impuestos indirectos y falta de progresividad. También se caracteriza por constantes reformas tributarias fracasadas y un recurrente déficit fiscal. Todo esto permite afirmar que se trata de una estructura histórica con una fuerte inequidad que revela la existencia de un Estado débil, que no ejercita de manera suficiente una de las características modernas del poder público, su soberanía fiscal.

La carga tributaria está entre las más bajas de América Latina, oscilando desde hace casi medio siglo en torno a un 8% como se expresó al inicio del presente apartado y subiendo muy lentamente a partir de 1996 en un intento por cumplir los Acuerdos de Paz. Los efectos de la baja recaudación son múltiples, tales como no poder satisfacer las urgencias del desarrollo social y económico y de esa manera, fortalecer las instituciones democráticas, y no preservar la estabilidad macroeconómica. Además, los déficit a que da origen provocan mayor endeudamiento externo e interno y limitan los márgenes de acción de la política monetaria.

La histórica baja recaudación se explica por la arraigada cultura anti-fiscal de los guatemaltecos, la debilidad de los instrumentos administrativos y penales, un sistema de privilegios y exoneraciones y la inoperancia del sistema de justicia tributaria. El poder fiscal del Estado se ve limitado por disposiciones de la actual Constitución.

En las últimas dos décadas se han intentado siete reformas fiscales, que han concitado el rechazo del empresariado y han tenido por ello, una aplicación y una eficacia muy relativa. El proyecto de Pacto Fiscal puede ser considerado como el esfuerzo técnicamente mejor logrado y más consensuado en la historia del país. El proceso del Pacto dio oportunidad para adoptar medidas tributarias en el 2000 destinadas a mejorar la recaudación y limitar el déficit fiscal, tales como las modificaciones en el ISR y en el IVA como se hace notar al inicio del presente apartado. Este se ha convertido en el impuesto más importante en los ingresos tributarios en los noventa. Ha habido cuatro reformas al IVA en este decenio, que en 1996 se aumentó del 7 al 10% y luego al 12% en Agosto de 2001. En cuanto a la productividad del IVA, ha variado a lo largo de estos años por diversas causas, pero se prevé su mejora. Con el fortalecimiento y modernización de la administración tributaria –especialmente con la SAT-

se espera que en general aumente la captación de impuestos y se eviten las altas cuotas de evasión.

Los Acuerdos de Paz de Guatemala incluyeron el tema fiscal por dos razones. La primera, de índole coyuntural, responde a la necesidad de proveer al Estado de mayores recursos para financiar el costo de los compromisos adquiridos en los Acuerdos. Y la segunda, de índole estructural, busca romper las limitaciones históricas del país para movilizar recursos internos y así poder sentar las bases de una política fiscal de mediano y largo plazo.

De esta manera, se pensó, surgiría un nuevo Estado, capaz de promover de manera más eficaz el desarrollo humano.

El tema fiscal se desarrolla primordialmente en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA), aunque algunos compromisos específicos sobre gastos también aparecen en otros acuerdos. De acuerdo al ASESA, la política fiscal es fundamental para el desarrollo sostenible de Guatemala y constituye la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo social.

Los compromisos fiscales abordan aspectos relacionados con los ingresos y egresos estatales. Por el lado de los egresos, se contempla: a) la reorientación del gasto público hacia la población y las localidades más pobres del país; b) el aumento del 50% en el gasto público destinado a los sectores educación, salud, seguridad ciudadana c) aumento de la inversión pública en el desarrollo rural; d) una asignación equivalente al 1.5% de los ingresos tributarios al sector vivienda; y e) reducir para el año 2000 el gasto militar a la mitad.

Por el lado de los ingresos, el ASESA incluye importantes compromisos, entre los que destaca aumentar un 50% la carga tributaria antes del año 2000, respecto al nivel registrado en 1995 con relación al PIB (lo cual significa que pasaría de aproximadamente 8% a 12% en el 2000). Este aumento de los ingresos tributarios debería realizarse, según los Acuerdos de Paz, dentro de un sistema tributario que garantice ser: a) justo, equitativo y globalmente progresivo, conforme al principio constitucional de la

capacidad de pago; b) universal y obligatorio; y c) que estimule el ahorro y la inversión.

Los compromisos por lado de los ingresos también incluyen medidas para fortalecer la administración tributaria, en especial, los mecanismos de fiscalización y recaudación, así como eliminar disposiciones que faciliten la evasión fiscal. Además, se contempla el compromiso de evaluar y regular estrictamente las exenciones tributarias para eliminar los abusos.

3.1 La descentralización Fiscal Municipal

Esta es una política que corresponde a los proyectos de reforma del Estado sugeridos por los Acuerdos de Paz, y es un proceso que busca transferir funciones fiscales exclusivas del gobierno central a otros niveles, especialmente al municipio. El primer paso a favor de la descentralización fiscal se estableció en la Constitución de 1985, al crear una asignación anual del 10% del Presupuesto de Gastos para las municipalidades del país. Pero existen aún algunas limitaciones en este campo, pues tanto la Constitución como el Código Tributario establecen que sólo el Congreso puede establecer tributos.

Las Municipalidades tienen actualmente tres fuentes principales de ingresos: las Contribuciones por mejoras, que representa alrededor del 2.5%; el Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (IUSI), que todavía no es suficientemente comprendido y aplicado y apenas contribuye con otro 2.5% del total y, finalmente, las Transferencias, que vienen desde el gobierno central.

Hay dos aspectos que limitan la intención descentralizadora, uno el destino inflexible de los fondos asignados y el otro es la cuantía menor de los recursos en que hay libertad de aplicación.

Si el Estado de Guatemala ha definido su administración como descentralizada, es procedente examinar cómo se distribuyen las responsabilidades entre los diversos niveles fiscales en el interior del gobierno. Para establecer el grado de descentralización que se va

alcanzando, se utiliza un Índice de Autonomía Fiscal (IAF), que busca medir el grado en que el municipio genera sus propios recursos. Teniendo en cuenta que las municipalidades manejan cerca del 20% de los ingresos corrientes del Estado y que el IAF no alcanza sino un 0.25, se deduce así una escasa responsabilidad en la generación de ingresos por parte de las administraciones locales. En cuanto a lo relativo a los egresos municipales, divididos en gastos de funcionamiento, de inversión y pago de la deuda pública. El más importante (67%) es el de inversión. Por la manera en que se registran los gastos municipales y los retrasos en que incurren en el envío de estados financieros al INFOM entre otras cosas, resulta difícil monitorear el destino del gasto municipal, es decir, el gasto de las municipalidades es poco transparente.

3.2 Principales cambios que se han venido generando sobre el impuesto sobre la renta ISR en Guatemala

3.2.1. En cuanto a las personas jurídicas en general

En el año de 1992: El Decreto Legislativo 26-92 emitió una nueva ley del ISR. En ésta se unificó su tasa al 25%. Antes de la reforma, el cálculo del impuesto se hacía de acuerdo a cuatro tramos de ingreso, y su tasa iba desde el 12% hasta el 34%. Se estableció una deducción máxima del 20% del total de utilidades reinvertidas. Asimismo, para personas jurídicas y naturales no domiciliadas en Guatemala, se redujeron las tasas en intereses, honorarios y sueldos y salarios del 25% al 12.5% y a las regalías y demás fuentes de renta del 34% al 25%. Se fijó una tasa del 15% sobre ganancias de capital.

En el año de 1994: El Decreto 61-94, que modificó al 26-92, aumentó la tasa única al 30%. Además, estableció el pago parcial del impuesto en forma trimestral y creó retenciones definitivas acreditables al ISR. Sin embargo, un fallo de la Corte de Constitucionalidad eliminó los pagos trimestrales a cuenta de la liquidación fiscal del ISR. Se aumentó el pago de la cuota anual sobre activos brutos al 1.5% y se eliminó el monto máximo de pago. Esa cuota pasó a ser acreditable al ISR. Se incrementó al 30% la tasa para las personas jurídicas y al 20% los impuestos sobre sueldos, salarios y prestaciones de las personas individuales y jurídicas no domiciliadas en

el país. El impuesto sobre regalías y otras retribuciones pasó del 25% al 30%. Se modificaron las tasas sobre retenciones de ingresos por intereses provenientes de activos financieros.

En el año de 1995: La Corte de Constitucionalidad suspendió las retenciones aplicadas a intereses y el impuesto sobre activos. Para compensar, se aprobó nueva legislación que incluyó un impuesto sobre activos netos, y el reestablecimiento de la retención sobre ingresos provenientes de intereses (Impuesto sobre productos financieros), legislación ésta última que como se analiza más adelante afecta al sector cooperativo ya que con la reforma que se dio se suprimió la exención que tenían las cooperativas como se profundizara al final de la presente investigación.

En el año de 1997: Se estableció la reducción gradual de la tasa de 30% a 25% en el período de 1998 a 2000, se redujo el impuesto sobre ganancias de capital a 10% y la tasa de reinversión de utilidades al 15%. El período de deducción de pérdidas de operación fue reducido de cuatro a dos años.

Se estableció un régimen especial de pago, del 4% de la renta bruta, como pago definitivo. Además, mediante la Ley de Supresión de Privilegios se derogó un grupo importante de exenciones, exoneraciones y deducciones del ISR y se redujo tasa de ISR sobre revaluación de activos al 0% para bienes inmuebles.

En el año de 1998: Se reestablecen incentivos fiscales contenidos en el DC 27-96, y se amplía la jurisdicción territorial de la ZOLIC.

3.2.2. En cuanto a las persona individuales

1992: Se redujo la tasa máxima de 34% a 25% y se aumenta la mínima de 4% a 15%, se fija una deducción personal única, que antes dependía de cargas familiares y otros factores, a Q.24,000.

Se reducen los tramos de renta imponible de 16 a 3, se crea la deducción del ingreso imponible del impuesto pagado por IVA, y se adicionaron deducciones personales como gastos médicos, cuotas pagadas al IGSS y planes de pensiones privados.

En el año de 1994: La tasa máxima aumentó al 30%, y se agregó como exenciones las donaciones a favor de partidos políticos, el aguinaldo y el bono 14.

En el año de 1997: Se redujo la tasa máxima de 30 a 25, se incrementó el ingreso mínimo exento, de Q.24 mil a Q.36 mil, se amplía el crédito fiscal del IVA al ISR hasta el 10% de la renta neta del contribuyente y se adicionaron como deducciones las cuotas a colegios profesionales y donaciones al Estado.

3.3 Principales cambios que se han generado en Impuestos Temporales

En el año de 1991 Impuesto temporal a ser pagado una sola vez, sobre la cifra mayor: ya sea del 1% de los ingresos brutos devengados por personas individuales o jurídicas, o del 1% del activo neto total.

En el año de 1996: Impuesto de solidaridad, extraordinario y temporal (ISET), acreditable al ISR, vigente durante 1996 y 1997. En 1996, su tasa fue de 1% para el total de ingresos brutos y 2% del activo total neto.

Para 1997 se modificaron las tasas a 1.5% y 3%, respectivamente. La mitad de la recaudación del ISET fue depositada en el BANGUAT.

1997: Impuesto sobre empresas mercantiles y agropecuarias (IEMA), acreditable al ISR, cuya vigencia se fija hasta 1999. Se fijó una tasa de 1.25% para ingresos brutos totales o 2.5% del activo total neto.

En el año de 1999: Se prorroga el IEMA hasta el año 2003.

3.4 Principales cambios que se han generado en la ley del Impuesto al Valor Agregado IVA

En el año de 1992 Se amplió la base tributaria con la inclusión de nuevos hechos generadores y la eliminación de exenciones a servicios y bienes. La tasa del 0% es mantenida únicamente para las exportaciones y ventas al menudeo.

En el año de 1994: La tasa subió del 7% al 10%. Se aumentó la cantidad de actividades y personas exentas. Se revisó el sistema de crédito fiscal: los reembolsos se limitan a exportadores y exenciones específicas.

En el año de 1996: Entró en vigencia la tasa del 10% del IVA. Se introdujo un régimen especial, que hace más expedito el reembolso mensual del crédito fiscal a exportadores. Se extendió el concepto de exportaciones a los servicios.

En el año de 1999: El Decreto 39-99 afectó principalmente la venta de vehículos usados y además estableció nuevos procedimientos para el traslado de los mismos.

Las medidas tributarias adoptadas en el año 2000 principalmente fueron las siguientes:

3.4.1 Modificaciones realizadas por el Decreto 44-2000 del Congreso de la República

ISR La aplicación del ISR con carácter de pago definitivo del 5% sobre transporte de carga terrestre, marítimo y aéreo internacional.

Deducción de la renta neta de hasta el 5% del total de las utilidades del período anual de imposición, provenientes de rentas gravadas, que se reinviertan en la adquisición de planta, maquinaria y equipo; y hasta 5% del total de las utilidades provenientes de rentas gravadas, que se reinviertan en programas de capacitación y readiestramiento de sus trabajadores.

La deducción máxima permitida por donaciones en cada período de liquidación, no podrá exceder del 5% de la renta neta, ni de un monto máximo de Q500 mil anuales.

Se incrementó las tasas del ISR de las personas Naturales del 25 al 31%, según tramos de ingreso.

Incremento de la tasa del ISR de las Personas Jurídicas del 25 al 31%. IVA Se agregó a la base de cálculo del IVA sobre importaciones, que antes

incluía sólo el precio CIF, el monto de los derechos arancelarios y demás recargos que se cobren con motivo de la importación o internación.

Otros Se corrigió el tratamiento a microbuses y vans, revisando su base imponible en el Impuesto de Circulación de Vehículos.

Se reformó la ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, en relación con la forma de pago del Impuesto. Incremento de US\$10.00 al impuesto de salida del país.

Se reformó el artículo 5 del Decreto legislativo 40-98 sobre la Ley de ZOLIC. A las empresas que se instalen y operen dentro de la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla exonerándolas del pago de: a) IVA, b) IUSI, c) timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, d) derechos arancelarios a la importación y e) arbitrios, tasas y contribuciones.

3.4.2 Modificaciones realizadas por el Decreto 80-2000 del Congreso de la República

ISR Se modificó el derecho al crédito a cuenta del ISR por el IVA para las adquisiciones de bienes y servicios. En este sentido, se estableció una escala descendente para acreditarlo, la cual mantuvo el 100% para los períodos del 1 de julio del 2000 al 30 de junio del 2001, y del 1 de julio del 2001 al 30 de junio del 2002 y del 50% del IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios durante el período del 1 de julio del 2002 al 30 de junio del 2003 y en los períodos posteriores.

Con el fin de limitar la deducción de pérdidas del ISR, se estableció que el saldo de las pérdidas no compensadas durante el período subsiguiente no podría acumularse ni compensarse en los períodos de liquidación definitiva anual posteriores al primer quinquenio.

Se adicionaron como gastos personales deducibles las primas de seguros no dotales, de accidentes personales y gastos médicos hospitalarios, contratados con empresas extranjeras registradas en la Superintendencia de Bancos.

Se incrementó la retención del 4% al 5% sobre el pago por servicios como actividades técnicas, profesionales o científicas, servicios no financieros, transporte, arrendamiento de bienes, rentas pagadas a artistas y deportistas.

Se exoneraron del pago de impuesto los intereses generados por préstamos otorgados por bancos extranjeros de primer orden o debidamente acreditados, los de carácter multilateral, así como los anticipos de exportaciones.

Se eliminó la deducción de intereses sobre créditos no otorgados por las Cooperativas de Ahorro y Crédito legalmente constituidas y por las instituciones bancarias y financieras establecidas en el país y sujetas a la inspección de la Superintendencia de Bancos.

IVA Se cambió el régimen de devolución a los exportadores: la devolución solamente se hará en efectivo, eliminando los vales tributarios; la devolución solo podrá ser solicitada mensualmente al BANGUAT. Si la devolución solicitada es menor de Q.500 mil será del 75%, y del 60% si es mayor de aquella cantidad.. Se exige la presentación de facturas como respaldo de las exportaciones realizadas. Solamente se podrán realizar solicitudes si se ha exportado en el período por el que se solicita la devolución.

Finalmente, se elimina la obligación de integrar el IVA por facturas especiales y su posterior reclamación como devolución.

Se limitó el reconocimiento del crédito fiscal por la adquisición de activos fijos que no se encuentren directamente vinculados con las actividades productivas **IEMA Ampliación indefinidamente su vigencia.**

En cuanto a los antecedentes de las leyes fiscales aplicada a las cooperativas, se debe de hacer mención que las mismas se han ido reformando en función de las necesidades del Estado de captar más ingresos, producto de ello se dispone en el año 2000 mediante el Decreto legislativo del Congreso de la República Decreto 44-2000 la supresión de privilegios de manera genérica, dentro de ellos se afectaron a las cooperativas.

Esta supresión de privilegios regulo lo que corresponde al pago del Impuesto del Timbre para todas aquellas operaciones de crédito efectuadas entre particulares y entre personas jurídicas y particulares o entre personas jurídicas entre sí, que no fueran Bancos; este impuesto dejaba en desigualdad a dichas operaciones debido a que además del interés que debería de cobrarse se aumentaba el impuesto correspondiente a través del pago del timbre.

Esta normativa privilegiaba al sistema bancario toda vez que el crédito proveniente de dicha fuente no se regulo sujeto al impuesto antes indicado. Esta situación que violó flagrantemente el principio de igualdad establecido en la Constitución Política de la República dio origen a que entidades como las fundaciones plantearan la inconstitucionalidad, la cual fue declarada por la Corte de Constitucionalidad con lugar y por tanto expulsada dicha normativa del ordenamiento jurídico guatemalteco, debido a que las resoluciones de la Corte son vinculantes y de observancia erga omnes.

No cabe duda que aunque la inconstitucionalidad fue planteada por personas ajenas a las cooperativas la resolución les beneficio en vista de que los créditos que es una de las principales actividades del sector cooperativo ya no fueron objeto del impuesto, lo cual beneficio y equilibrio la actividad crediticia del país bancos y los otros agentes económicos.

Es importante indicar que todas las reformas que han sufrido las leyes que tienen relación con el impuesto el impuesto al Valor Agregado IVA, Impuesto Sobre la Renta ISR, ley de Productos Financieros IPF, Ley de Timbres Fiscales y de papel sellado especial para protocolos, en todas ellas y así debe de ser para no entrar en contradicción en la regulación de las exenciones que se establecen en cada una de las leyes, se dejan exentas las operaciones que realizan las cooperativas con sus asociados, entre cooperativas, entre éstas y las federaciones y con la confederación y viceversa.

Considero que debería de ser sujeto de estudio para las cooperativas el hecho de que la Constitución Política de la República que se declara de necesidad la promoción y el fomento de las cooperativas, y siendo que en forma paulatina se han venido disminuyendo los privilegios de estas

organizaciones, debería de plantearse la posibilidad si esta eliminación no deviene inconstitucional con el artículo referido. Es importante destacar que aunque cualesquiera derecho tiene su prescripción, no es el caso de la inconstitucionalidad debido a que la norma jurídica se caracteriza para su validez en formal y material, el primero de ellos el procedimiento constitucional establecido para su promulgación y la segunda que es la que nos interesa se refiere a que la norma para tener validez material no debe contradecir preceptos constitucionales razón por la cual esta no rescibe mediante la normativa ordinaria este vigente, considero que las cooperativas deberían ponerle atención a lo aquí planteado.

4. Impuestos de nivel nacional sobre toda clase de cooperativas

- Código Tributario y sus Reformas, Decreto número 6-91 del Congreso de la República
- Ley del Impuesto al Valor Agregado Decreto número 27-92 y sus reformas)
- Ley del Impuesto sobre la Renta (Decreto 26-92 y sus reformas)
- Ley del Impuesto y Temporal en apoyo a los Acuerdos de Paz
- Ley del Impuesto sobre Productos Financieros
- Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolo
- Decreto 20-2006 (agentes retenedores del IVA)

4.1 Leyes Fiscales aplicables a las Cooperativas

Con relación a las Asociaciones Cooperativas encontramos como un antecedente que la **Constitución Política de la República**, en su artículo 119 inciso e) de la norma referida, *establece dentro de otras obligaciones del Estado fomentar y proteger la creación y funcionamiento de las cooperativas proporcionándoles la ayuda técnica y financiera necesaria.*

Asimismo en su artículo 67 establece: **“Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas”**.

Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera

otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.

El Decreto número 82-78 Ley General de Cooperativas sus artículos 2 y 4 indican:

Naturaleza de las Cooperativas:

Las cooperativas debidamente constituidas, son asociaciones titulares de una empresa económica al servicio de sus asociados.

Principios:

- a) Procurar el mejoramiento social y económico de sus miembros mediante el esfuerzo común.
- b) No perseguir fines de lucro, sino de servicio a sus asociados.

Además en su artículo 23 considera como Incentivos Fiscales los siguientes:

- Exención total del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. (Según Decreto 37-92, Ley de Timbres Fiscales y Papel sellado Especial para Protocolos se exceptúan los actos y contratos con terceros)
- Exención del impuesto sobre compraventa, permuta y adjudicación de inmuebles, herencias, legados y donaciones, cuando sean destinados a los fines de las Cooperativas. (Según el Decreto 27-92, Ley del Impuesto Al Valor Agregado, cuando realicen transferencias de bienes a favor de las cooperativas están gravados del impuesto)
- Exoneración de impuestos, derechos, tasas y sobrecargos en las importaciones de maquinaria, vehículos de trabajo, herramientas, instrumentos, insumos, equipo y material educativo, sementales y

enseres de trabajo agrícola, ganadero, industrial o artesanal, siempre que no se manufacturen en el país o en el área centroamericana.

Esta exoneración será aplicada en cada caso por el Ministerio de Economía, previo dictamen favorable de INACOP, y comunicada a la Superintendencia de Administración Tributaria para los efectos aduanales.

Según la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los insumos no están exentos (artículo 7 numeral a).

4.2 Código Tributario (Decreto Número 6-91 del Congreso de La República y sus Reformas)

En este Código se encuentran reguladas las normas de carácter tributario que deben observar de manera imperativa todas aquellas personas individuales o jurídicas sujetas a su jurisdicción, básicamente controlados y recibidos por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. En el mencionado Código se encuentran aquellas personas jurídicas que no se encuentran sujetas al tributo, previa calificación de la SAT, tal el caso de las fundaciones cuyo requisito esencial exigido es que no puedan distribuirse ninguna utilidad dentro de sus miembros y que sus fines de operatividad sea establecida de manera taxativa en la escritura de constitución como entidades sin fines de lucro, razón por la cual no cabe dentro de este marco las cooperativas debido a que por ley las mismas al ser sujetos de una empresa económica, la finalidad es la producción de excedentes. En materia procesal la misma ley establece la forma de impugnación de las resoluciones y el procedimiento respectivo.

El cuerpo legal referido es de carácter general, debido a que a él están sujetos cualquier persona jurídica o individual; las cooperativas se encuentran sujetas a dicha normativa.

Las cooperativas de conformidad con la ley son agentes de retención del impuesto generado con operaciones entre terceros y las cooperativas, así mismo la ley contempla a los representantes legales como las personas obligadas y responsables ante la Superintendencia de Administración

Tributaria SAT por el cumplimiento de las obligaciones tributaria de la cooperativa que representen.

Es de tomar en cuenta que la evasión fiscal constituye de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico interno, delito y por tanto los representantes legales de las cooperativas son quienes se comprometen al cumplimiento de la ley y en todo caso esta la normativa en correspondencia con lo que para el efecto se establece en el código penal que indica que por las faltas o delitos cometidos por las personas jurídicas responden sus representantes legales y el círculo jurídico se cierra cuando en la norma ordinaria de igual jerarquía que el código tributaria, es decir el Decreto 78-82 del Congreso de la República, Ley General de Cooperativas, establece que los miembros del Consejo de Administración son co-responsables de las infracciones cometidas.

4.3 Ley del Impuesto al Valor Agregado (Decreto Número 27-92 y sus reformas)

En esta Ley, se consideran las exenciones para las Cooperativas tanto en importaciones así como en las operaciones que realizan localmente, en la forma siguiente:

Las importaciones de bienes muebles efectuadas por:

Las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas, legalmente constituidas y registradas, cuando se trate de maquinaria, equipo y otros bienes de capital directa y exclusivamente relacionados con la actividad o servicio de la cooperativa, federación o confederación.

Que si bien es cierto en la norma se encuentra regulada esta exención en la práctica resulta ser sumamente engorroso el trámite, debido a que este debe de tramitarse por medio del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP, el cual aparece dentro del organigrama general del sector público como una dependencia que pertenece al Ministerio de Economía y de conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco en materia impositiva, esta corresponde a su control y recaudación a la Superintendencia de

Administración Tributaria SAT, entidad que aunque es organizacionalmente autónoma tiene más afinidad con el Ministerio de Finanzas Pública que con aquel al que pertenece el INACOP, por lo que en la práctica al tener que adquirir un dictamen de la SAT se opta por no utilizar esta exención habida cuenta que en materia de importaciones en las cooperativas, éstas van dirigidas en su mayoría a utilización de insumos agrícolas, llamase herbicidas, fungicidas, fertilizantes, etc, los cuales deben de utilizarse en una época determinada para que se logre la eficacia que se busca en los cultivos, de manera que siendo un trámite tan complicado el permiso a la exención se obtendría cuando ya no se necesita el producto que se desea importar en materia agrícola con las excepciones por supuesto de aquellas importaciones que no deben de tener un tratamiento inmediato.

Artículo 7 numeral 1 inciso a) L. IVA

Requisitos:

- Debe solicitar dicha exención al Ministerio de Economía previo dictamen favorable del Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) para que la Administración Tributaria a través de la Intendencia de Aduanas, otorgue la franquicia correspondiente.

4.3.1 Exención en Operaciones Locales:

- Las cooperativas no cargarán el IVA cuando efectúen operaciones de venta y prestación de servicios con sus asociados, cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas. En sus operaciones con terceros, deben cargar el impuesto correspondiente. El impuesto pagado por las cooperativas a sus proveedores, forma parte del crédito fiscal.

Artículo 7 numeral 5 L. IVA y Art. 10 Reglamento de Ley del IVA

4.3.2 Transacciones exentas y gravadas

Las Cooperativas que realizan operaciones únicamente con sus asociados, todas sus rentas están exentas al IVA, por consiguiente no deben presentar la declaración ni pago de dicho impuesto.

En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, están exentos los servicios que prestan tanto a sus asociados como a terceros.

En el primer párrafo se establece que las operaciones que se realicen en el campo de las cooperativas, sean éstas entre asociados y cooperativa, entre cooperativas y federaciones y de éstas con la Confederación y viceversa se encuentran exentos.

Esta normativa si bien es cierto favorece las operaciones Inter. Cooperativas y asociados, también lo es que toda realización de negocios con terceros se encuentra gravada de manera que a título de ejemplo si una cooperativa de consumo adquiere sus mercaderías en el mercado, ésta paga el Impuesto al Valor Agregado IVA en la transacción de manera que al comprar el asociado dicho producto ya lo adquiere con el impuesto incorporado en función del costo y por lo tanto no ha recibido beneficio alguno; este comportamiento se extiende a los demás tipos de cooperativas.

Como puede observarse pareciera si nos atenemos a la redacción del texto de la norma en su párrafo segundo, parecería que las cooperativas de ahorro y crédito tendrían más privilegios que los demás tipos de cooperativas, sin embargo, ello no es así debido a que el servicio principal de acuerdo a la actividad económica que realiza las cooperativas de ahorro y crédito se orientan a otorgar crédito a sus asociados y en casos especiales con proyectos específicos a algunos particulares, éstas operaciones de conformidad con la normativa guatemalteca corresponden al derecho privado específicamente a lo que en materia civil se conoce como contratos y precisamente para documentar los derecho y obligaciones que nacen de estos contratos, se denominan mutuos los cuales se celebran para garantizar los derechos y obligaciones que nacen de los créditos otorgados y en vista que en la normativa que regula los mutuos entre particulares se encuentran exentos de todo pago, no podría por añadidura esta normativa dedicada a las cooperativas contradecir lo regulado en este aspecto para las operaciones que antes indique.

Artículo 7 numeral 5 L. IVA

Las Cooperativas que vendan o presten servicios a terceras personas deben pagar el IVA mensualmente y en la declaración mensual deberán consignar, como crédito fiscal, únicamente, la proporción que corresponde a las ventas o prestaciones de servicios gravados

Artículo 7 numeral 5 L. IVA

Ejemplo:

- Una cooperativa que tenga venta de fertilizantes, compra a sus proveedores Q.12,000.00, y el movimiento es el siguiente:

Asociados Q. 5,000.00
No Asociados Q.10,000.00

Debe cargar el IVA por las operaciones con no asociados.

Total Compras Q.12,000.00
Total Ventas Q.15,000.00 = 100%

Venta a asociados Q. 5,000.00 = 33.33%
Venta a no Asociados Q. 10,000.00 = 66.67%

El crédito fiscal al que tienen derecho es al 66.67%.

La diferencia con las personas jurídicas que se regulan en otros ámbitos como el establecido en el Código de Comercio se puede hacer notar puesto que en el Impuesto al Valor Agregado IVA que es objeto del presente análisis encontramos que se establece que dicho impuesto para las personas jurídica antes mencionadas tiene una tarifa uniforme del 12% sobre el hecho generador del impuesto y se aplica entre otras a las siguientes operaciones: venta de bienes muebles o inmueble y servicios, importación o exportación de productos, la donación y el arrendamiento de bienes muebles.

El sujeto pasivo es el consumidor. Sin embargo la recaudación la realizan

las empresas que venden o prestan los servicios pues aplican al monto de sus facturas el porcentaje correspondiente al impuesto. Lo que recaudan al facturar este impuesto tiene la consideración de crédito fiscal. El débito fiscal es el pago del IVA, es decir del impuesto al valor agregado que las empresas realizan por servicios o productos que han debido de adquirir para llevar a cabo su actividad. Al crédito fiscal se le deduce el débito fiscal y la diferencia se paga en cuotas trimestrales a la administración del Estado.

4.4 Ley del Impuesto sobre la Renta (Decreto 26-92 y sus reformas)

4.4.1 Exención del Impuesto sobre la renta:

- La Ley del Impuesto Sobre la Renta, al establecer la exención para las Cooperativas indica que esta proceden cuando se obtienen rentas por transacciones con sus asociados y con otras cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas; **no así las rentas, intereses y ganancias de capital realizadas con terceros.**

Como ya indique este tipo de operaciones exentas aparece en todas las leyes tributarias puesto que de lo contrario si existiere contradicción mediante de uno de los métodos de la interpretación se podría establecer que la norma posterior prevalece sobre la anterior, lo cual anularía una de las regulaciones de las leyes tributarias respecto a las cooperativas.

Artículo 6 inciso o L. ISR

4.4.2 Transacciones Gravadas y Exentas:

Cuando una Cooperativa vende o presta servicios a asociados y a terceros, aplicaran a cada una de las mismas los costos y gastos directamente necesarios para producirlos. En el caso que por su naturaleza no pueda aplicarse directamente estos costos y gastos, deberán ser distribuidos en forma directamente proporcional entre cada una de las rentas.

Artículo 39 inciso a) L. ISR

Tratamiento distinto tienen las personas jurídicas que se encuentran reguladas en el ámbito del Código de Comercio ya que no se encuentran exentas como se regula para las cooperativas en el caso mencionado con anterioridad en las exenciones; ya que dicho impuesto se establece sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliado o no en el país, así como cualquier otro ente, patrimonio o bien que se especifique en la ley del impuesto sobre la renta, que provenga de la inversión de capital, del trabajo o de la combinación de ambos; tratando como situaciones especiales el caso de las cooperativas que se encuentran constituidas en el país, provenientes de las transacciones con sus asociados y con otras cooperativas, federaciones y confederaciones, haciendo la salvedad que cuando dichas rentas provengan de transacciones con terceros, si estarán afectas al impuesto sobre la renta.

Fuera del esquema de constitución de las cooperativas y de todos aquellos entes individuales o jurídicos regulados por el Código de Comercio se encuentran otras como las asociaciones, que tienen su normativa individual y las fundaciones de igual manera, sin embargo cada una de ellas en materia tributaria tiene el mismo trato que hemos venido comentando.

4.5 Ley del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz –IETAAP-

**(Decreto No. 19-2004
Del Congreso de la República)**

Hecho Generador:

La realización de actividades mercantiles o agropecuarias en territorio nacional (Art. 1 y 3)

TENER UN MARGEN BRUTO(*) SUPERIOR AL 4% DE SUS INGRESOS BRUTOS.

- (*) Total de ingresos por servicios
- + Diferencia entre el total de ventas
- Costo de ventas

Exenciones

Están exentos del impuesto que establece la ley:

e) Las asociaciones, fundaciones, cooperativas, federaciones, centrales de servicio y confederaciones de cooperativas, centros educativos y culturales, las asociaciones deportivas, gremiales, sindicales, profesionales, los partidos políticos y las entidades religiosas y de servicio social o científico, que estén legalmente constituidas y autorizadas, siempre que la totalidad de los ingresos que obtengan y sus patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de su creación y que en ningún caso distribuyan beneficios, utilidades o bienes entre sus integrantes. De lo contrario no serán sujetos de esta exención.

Artículo 4 L. IETAAP

Del texto de la norma se desprende que estas exenciones se realizan únicamente cuando las utilidades o excedentes sean redistribuidos para mejorar el patrimonio de las entidades sujetas al impuesto de donde deviene que si las cooperativas distribuyen excedentes estarían afectas al relacionado tributo aunque este sea de carácter extraordinaria tal es el caso del IETAAP.

La diferencia con las empresas mercantiles se encuentra en que dicho impuesto se genera por la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional. grava a estas empresas o compañías cuando su margen bruto es superior al 4% de sus ingresos brutos.

Este impuesto es de carácter extraordinario y temporal, y su finalidad es financiar los Acuerdos de Paz, es decir que cuando en 1999 se firmo la paz en Guatemala entre los grupos insurgentes integrados a través de la organización URNG y el representante del Estado Guatemalteco se adquirieron compromisos que no era posible poder financiar mediante el presupuesto ordinario de ingresos y egresos, de ahí la calidad de temporalidad y la calificación extraordinaria del tributo.

Las empresas deben de pagar un porcentaje sobre la cantidad mayor entre

la cuarta parte del monto del activo neto o la cuarta parte de los ingresos brutos. El porcentaje a pagar depende del periodo impositivo.

4.6 Ley del Impuesto sobre Productos Financieros

- Esta Ley crea un impuesto específico que grava los ingresos por intereses de cualquier naturaleza, que se paguen o acrediten a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala, **no sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos.**
- Las Cooperativas, cuando paguen o acrediten erogaciones por el concepto de intereses debe efectuar la retención de este impuesto, excepto cuando sea a instituciones sujetas a fiscalización de la Superintendencia de Bancos. En los casos cuando una Cooperativa pague intereses a sus asociados **deberá retenerles** de acuerdo a la Ley del Impuesto de Productos Financieros.

Artículos 1, 2, 3, L. ISPF

- Cuando las cooperativas en cumplimiento de sus fines, otorgan créditos a campesinos, microempresarios, cooperativistas o personas en las áreas rurales, hacen que éstas se conviertan en agentes de retención del IPF, toda vez que éstos deben pagar intereses por préstamos recibidos y de conformidad con la ley deben retener el impuesto de productos financieros y enterarlos a las cajas fiscales.
- La Superintendencia de Administración Tributaria considera que cuando no se le retenga el Impuesto Sobre Productos Financieros a la Cooperativa, ésta deberá efectuar el pago directo y declararlo en el plazo establecido en la ley.

Cooperativas sujetas al pago del impuesto

- Las cooperativas **gozaron hasta el 30 de junio de 2000**, de la exención de este impuesto de conformidad con el inciso c) del artículo 9 de la ley del Impuesto Sobre Productos Financieros, **quedando gravadas**

por el referido tributo **a partir del 1 de julio de 2000**, en virtud, que el Decreto número 44-2000 del Congreso de la República, publicado el 30 de junio de 2000, derogó el inciso c) del citado texto legal.

Procedimiento para retener el IPF por parte de las cooperativas

- Las cooperativas cuando paguen o acrediten en cuenta intereses de cualquier naturaleza deben actuar como agentes de retención y obligados al cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto Número 26-95 del Congreso de República.
- En todo caso siempre dispone excluir a las entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos.

Mi criterio como se indico cuando comente la inconstitucionalidad planteada por el pago el impuesto del timbre de las operaciones entre particulares, dejando en desigualdad respecto a las operaciones bancarias, es un calco de lo que sucede con la presente ley, de manera que debe de estudiarse de esta manera para determinar la posibilidad de plantear o no una acción de inconstitucionalidad.

Aquí no existe mayor diferenciación respecto al tratamiento que se les da a las empresas mercantiles pues solamente se excluyo del pago de este impuesto a las personas que se sean fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, es decir a las sociedades anónimas constituidas con su objeto principal para funcionar como Bancos que operan en el país. Al inicio tal como se indicó, la cooperativas se encontraban exentas del pago de dicho impuesto, pero fue con la reforma que se realizó en el Decreto 44-2000 del Congreso de la República de Guatemala el 11-6-2000 que se suprime la norma que exoneraba a las cooperativas en el artículo 9 inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre Productos Financieros, Decreto 26-95 del Congreso de la República.

4.7 Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos

El sujeto pasivo del impuesto es quien suscriba u otorgue documentos que contengan actos o contratos civiles y mercantiles, o documentos extranjeros que tengan que ser protocolizados en el país para surtir efectos, comprobantes de pago, etc. La tarifa que se aplica es del 3% del valor de los actos o contratos afectos.

En esta Ley, la exención para las Cooperativas está condicionada a los actos y contratos realizados únicamente con sus asociados, al indicar en el artículo 10 numeral 5 que están exentos, todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederación de cooperativas entre sí y con sus asociados. Sin embargo los actos y contratos que realicen con terceros pagarán el impuesto establecido en esta ley”.

5. Conclusión

Apreciación crítica general y breve mención de los principales problemas y perspectivas de la tributación de las cooperativas

- Las cooperativas aunque constitucionalmente se regulan como obligatoriedad del Estado en cuanto a su fomento y protección, en la práctica mediante la emisión de ley ordinaria en forma paulatina le ha quitado a las cooperativas las exenciones correspondientes, al extremo que en la actualidad únicamente se mantiene la exención en cuanto a las operaciones realizadas entre las cooperativas y sus asociados y entre cooperativas, federaciones y confederaciones. Este aspecto se ha dejado de esa manera solo con el fin de no hacer evidente la posible inconstitucionalidad, pues aunque a la vista pareciera de importancia, deja de tenerla si se toma en consideración que las principales operaciones se realizan con terceros, en cuyo caso las cooperativas se encuentran en igualdad de circunstancias que la empresa privada mercantil. Este escenario nacional deja en condiciones de muy poca posibilidad de desarrollo a aquellas cooperativas del área rural (mayoritarias en nuestro

país) en detrimento de la expansión y crecimiento del movimiento cooperativo nacional.

- De lo comentado y fundamentado en el texto del presente trabajo en lo que respecta a el impuesto sobre productos financieros que gravan la operación cuando la cooperativas otorga los intereses a sus asociados, por el dinero por ellos depositados en calidad de aportaciones; las operaciones bancarias que realicen los cuenta habientes en calidad de depósitos sujetos al pago de intereses, cuando éstos son retribuidos al depositante, la operación es exactamente la misma que realizan las cooperativas, sin embargo, la ley deja fuera de dicha normativa a los Bancos, razón por la cual considero que existe una violación constitucional que es objeto del planteamiento de esa naturaleza.
- Las cooperativas en forma sistemática han sido objeto mediante la promulgación de leyes ordinarias por parte del Congreso de la República, de una desgravación paulatina a sus beneficios, lo cual contradice el artículo constitucional que establece el fomento para las cooperativas y por el otro lado a desestimulado la organización principalmente rural campesina en vista de que quedan sometidos a una maraña legal que ni los propios profesionales en determinado momento conocen.
- En lo que corresponde al Instituto Nacional de Cooperativas INACOP y a la Inspección General de Cooperativas INGECOP considero que las competencias que tiene cada institución a nivel nacional en cuanto a sus recursos son muy limitados, sin embargo, la operatividad de las mismas es satisfactoria debido a la afinidad que han tenido con el movimiento cooperativo federado y no federado, ello sin duda es así porque de alguna manera en la práctica son complementarias y las contradicciones que han existido se pueden catalogar de ocasionales y es un esquema que no obstante se da la mezcla del sector público y el sector privado, deben de fortalecerse.